

HACIENDO USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, EL OBSERVATORIO DE EMPRESAS TRANSNACIONALES LLEGA A UNA CONCLUSIÓN: DONDE HAY MINERÍA, HAY CONFLICTO

El mapa de la conflictividad minera

En Chubut hay 16 proyectos de exploración, unas 25 ciudades que estarían afectadas directa o indirectamente si se desarrollan. Las organizaciones sociales son cuatro: las asambleas de Esquel y Gan Gan y las sedes del Foro Ambiental y Social en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.

POR D.M.
Comodoro Rivadavia
Redacción EES

Allí donde se instala o pretende instalarse la minería, un puñado de ciudadanos se organiza y le hace frente a la polémica industria. El Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO) y su Observatorio de Empresas Transnacionales elabora desde 2008 el Mapa de la Conflictividad Minera, que en Internet puede visualizarse con el Google Earth o el Google Maps.

El mapa tiene como objetivos principales: dar cuenta de la distribución territorial de los emprendimientos, mostrar el gran número de localidades afectadas por este tipo de explotaciones, crear una base de datos integrada para seguir ampliando y actualizando datos e informaciones futuras y ser una herramienta flexible que permita a diferentes organizaciones sociales y laborales agregar sus datos y servir para investigaciones.

El mapa detectó en 2008 unas 400 ciudades afectadas por la megaminería. "El criterio para identificarlas ha sido proximidad al proyecto, proximidad a corrientes fluviales que serán utilizadas por las empresas como parte de la explotación de los minerales, corriente general de vientos", explica el informe de ese año.

■ **Proyectos:** En el caso de Chubut, se identificaron hasta el momento 16 proyectos, todos de exploración: El Desquite (a sólo 10 kilómetros de Esquel), Navidad (en el norte de la meseta), Mina Angela (más al norte que Navidad, cerca de la frontera con Río Negro), Arroyo Verde (en el extremo noreste provincial), Madryn Rift (a pocos kilómetros de Puerto Madryn), Proyecto Crespo (en Laguna La Seca), Bloque Gastre (sobre



EN GUARDIA. Allí donde se instala o pretende instalarse la minería, un puñado de ciudadanos se organiza y le hace frente a la polémica industria.

la localidad homónima) y Los Huemules (al Oeste de Esquel). Además, están Leleque, Nahuel Pan y Lago Cholila (los tres en la cordillera, Carrenleufú (sobre el río Corcovado), Golden (en la meseta) y Ferrocarrilera (al sur del Lago Fontana); y los proyectos uraníferos de Cerro Solo y La Fortuna (ambos en el centro de Chubut).

■ **Ciudades:** Las ciudades afectadas suman 25, a ser: Cholila, La Bolsa, Epuén, Esquel, Gobernador Costa, Gualjaina, José de San Martín, Lago Puelo, Sarmiento, Gastre, Trevelin, Carrenleufú, Corcovado, Jaramillo, Alto Río Senguerr, Puerto Madryn, Nahuel Pan, Gan Gan, Paso de Indios, Los Tepués, Lepá, Leleque, El Coyte, Aldea Apeleg y Rawson.

■ **Organizaciones:** Sólo una organización está marcada en el mapa: la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel. Vale destacar que en la provincia trabaja el Foro Ambiental y Social de la

Patagonia, con sedes en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, además de una Asamblea de Vecinos Autoconvocados en Gan Gan. En el informe de hace tres años, FOCO decía sobre las organizaciones sociales: "hemos relevado a 17, las cuales consideramos que por su nivel de organización, cantidad de miembros, difusión de sus actividades y logros en su lucha son actores de carácter fundamental en la problemática, lo que no excluye a demás organizaciones que no están mencionadas simplemente por el difícil acceso a la información acerca de las mismas y para tomar contacto con ella".

EL TRIO DE LA DISCORDIA

■ En Chubut existen tres megaproyectos mineros que tienen a gran parte de la ciudadanía en contra: Navidad, Cerro Solo y El Desquite.

El proyecto Navidad está a cargo de Pan American Silver, y se

trata de uno de los yacimientos de plata y plomo más grandes del mundo. El llamativo nombre «Navidad» se debe a que los primeros resultados de laboratorio se conocieron un 25 de diciembre. Existen minerales por US\$3.500 millones, según las propias estimaciones de la compañía.

En el caso de Cerro Solo, hablamos de uranio y su principal interesado es la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) para alimentar a las incipientes centrales atómicas. Además de este reservorio, a su alrededor existen otras potenciales zonas uraníferas como El Regalo.

El Desquite está a sólo 10 kilómetros del centro urbano de Esquel y fue el motivo de las primeras movilizaciones contra la megaminería a cielo abierto en Chubut. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados que se conformó marchó, difundió información y hasta impulsó una consulta popular en la comarca andina que terminó con un 81% de los votos en rechazo del proyecto.

UN MODELO PERMISIVO

■ De acuerdo a FOCO y otras fuentes especializadas, la Argentina se ubica en el quinto lugar en cuanto a potencial minero. En contraste, el marco legislativo nacional (Ley 24.196 de Fomento de la actividad Minera, diseñada en la década de los noventa) es desregulatorio para las multinacionales que operan en el país, aunque cada provincia tiene su propia legislación.

En Chubut, dos leyes provinciales prohíben la minería: la 5001 se expide sobre la actividad a cielo abierto y con cianuro, mientras la 5401 suspende cualquier emprendimiento minero en la cordillera.

El régimen nacional favorece a las empresas con unas mínimas regalías del 3%, con un impulso dudoso de fuentes de empleos y dejando un fuerte impacto ambiental.

"Todos estos factores tienen como consecuencia la destrucción de las débiles economías regionales y originan enfermedades mortales para sus habitantes", sostiene desde FOCO.

Al mismo tiempo, la contaminación es uno de los riesgos más visibles de la megaminería y el eje de la discusión en cuanto lugar pretende instalarse. El periodista Javier Rodríguez Pardo cuenta en su libro "Vienen por el oro vienen por todo: las invasiones mineras 500 años después" (Ediciones Ciccus, 2009) una interesante conferencia de prensa con el ingeniero Carlos Rudolph, de 75 años, diseñador del proyecto de Bajo La Alumbra en Catamarca.

Cuando el periodista le remarcaró que Mina Alumbra tenía demandas por las provincias de Santiago del Estero y Tucumán debido a la contaminación en los cursos de agua, el ingeniero interrumpió bruscamente: "¡Nosotros les dijimos que eso iba a pasar!" ■



NEUQUEN Y CHUBUT, LAS DOS PROVINCIAS PATAGONICAS CON MALA NOTA EN EL INFORME DE ENDEPA SOBRE EL ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS

Derechos desoídos: pueblos originarios siguen en lucha

POR D.M.
Comodoro Rivadavia
Redacción EES

La Ley 26.160, que establece un relevamiento de territorios indígenas y la suspensión de todo desalojo, sigue estancada. En las 24 provincias argentinas, el estado de los derechos de los pueblos originarios ha empeorado: ignorar los reclamos en Tucumán, reprimir en Formosa y destimar las constantes obstrucciones del relevamiento territorial en la Patagonia.

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) denunció el estado de los derechos de los pueblos originarios en un informe difundido en mayo: "advertimos y denunciaremos el crecimiento de la violencia estatal como aparato represivo en la ejecución de los desalojos, como ser el caso de la comunidad de Las Pailas (Salta) y La Primavera (Formosa). En éste último perdieron la vida dos personas. El cacique Chocobar (Tucumán) fue asesinado en ocasión de protesta por sus tierras", dice el texto.

En el sur, Neuquén es la provincia con mayores problemas. La Ley 26.160 no se aplica pese a que tiene vigencia desde 2006. Los desalojos violentos no han cesado, como el ocurrido el 26 de agosto de 2009 en la comunidad Curru-mil. La tierra fue cedida a un particular por la Dirección General de Tierras de esa provincia y las familias fueron corridas con balas de gomas.

El 2 de diciembre de 2010, tres unidades especiales de la Policía de Neuquén atacaron a la comunidad Paichil Antriao, cerca de Villa La Angostura. El Observatorio de Derechos Humanos, el 5 de marzo pasado, denunció que "la comunidad Paichil Antriao sufre hace años el hostigamiento permanente de los gobiernos provincial y municipal y del Poder Judicial, que conjuntamente con un

"advertimos y denunciaremos el crecimiento de la violencia estatal como aparato represivo en la ejecución de los desalojos", dice el informe de ENDEPA que difundieron en mayo. Además de la crítica situación en Salta, Formosa y Tucumán, las provincias patagónicas de Neuquén y Chubut siguen olvidando los derechos de mapuches y tehuelches que habitan el suelo desde hace miles de años.

grupo de empresarios de esa ciudad pretenden el loteo de sus tierras y el desalojo de sus miembros".

CHUBUT, SIN DECISION POLITICA

En Chubut, el Gobierno provincial se acercó al INAI en 2009 con interés de ser el órgano ejecutor del relevamiento. Varias comunidades expresaron su desconfianza en que sea el Estado quien lleve adelante la implementación de la ley. El Consejo de Participación Indígena (CPI) ratificó a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) como esto (Equipo Técnico Operativo), y la abogada Sonia Ivanoff, de Comodoro, quedó a cargo de la coordinación general.

El programa involucra a 95 comunidades pertenecientes a los pueblos Mapuche y Tehuelche. Pese a los mensajes de acercamiento del Gobierno provincial, la violencia en territorio indígena no se ha detenido. En 2009, la comunidad Blancuntre obtuvo el título comunitario pero el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen de Comodoro expresó: "en el último año, no solamente, el gobierno no avanzó en la entrega de títulos comunitarios sino que tampoco dio respuesta en los expedientes que se tramitan en el Instituto de Tierras".

Y agregan: "no existe decisión política de reconocer el derecho de las comunidades por la posesión y propiedad de las tierras que ocupan, tal como se garantiza en

las constituciones nacional y provincial y en instrumentos internacionales sobre derechos indígenas. Lo expresado en los discursos políticos del gobernador no va de la mano con lo que sucede en la realidad".

El más emblemático de los casos es el de la comunidad Santa Rosa Leleque, que en marzo de último el juez Omar Magallanes, del Juzgado de Ejecución de Esquel, hizo lugar al pedido de la Compañía de Tierras Sud Argentino, de los Benetton, fijando un plazo de 10 días a la comunidad para que desocupe el lugar. A fines del año pasado la comunidad presentó en los Tribunales de Esquel un recurso de casación y otro de inconstitucionalidad con el objetivo de que la justicia se pronuncie por la suspensión del juicio que se sigue por las más de 500 hectáreas.

TRAGICAS CONCLUSIONES

"Lamentamos corroborar además que tampoco se ha logrado frenar los desalojos o desocupaciones judiciales en su totalidad, registrándose casos en Las Pailas (Salta), Quilmes, Nogalito, Mollar (Tucumán), Pampa del Indio (Chaco), La Primavera (Formosa), Los Toldos (Buenos Aires), Curru-mil, Paichil Antriao (Neuquén), Santa Rosa Leleque (Chubut)", sostiene el informe de ENDEPA distribuido en mayo último.

Las represtiones a los pueblos originarios son brutales y en algunos casos terminaron con la muer-

EMBLEMA. La comunidad Santa Rosa Leleque enfrenta a la poderosa Compañía de Tierras Sud Argentino, propiedad de los hermanos Benetton.

te de integrantes de las comunidades. "En todas las acciones hubo innumerables daños materiales, morales y comunitarios. Todos estos incidentes se hubie-

ran evitado de haberse ejecutado el Programa de Relevamiento Territorial tal como se prevé legislativamente", denuncian desde ENDEPA.

"La falta de implementación del relevamiento se convierte en una herramienta para la violación de todos los derechos indígenas por cuanto impide y obstaculiza la prosecución de acciones para obtener la definitiva regularización dominial de los territorios que las comunidades ocupan ancestralmente", sostiene otra de las conclusiones del informe.

"Por otra parte, el territorio de las comunidades, aún aquellas que han logrado obtener la titularización, se encuentra en peligro por no estar asegurado efectivamente el control de sus recursos naturales. Durante los últimos años hubo una explosión de las autorizaciones de desmontes, aprovechamientos forestales o mineros que ponen en riesgo la vida, la identidad, el desarrollo cultural y el equilibrio comunitario de los pueblos originarios", sostienen.

ARGENTINA ORIGINARIA

Los negocios inmobiliarios y el avance del monocultivo de la soja son los dos grandes enemigos de los pueblos originarios del país. Darío Aranda, en su reciente libro "Argentina originaria: genocidios, saqueos y resistencias" (Lavaca editora, 2010), describe los problemas que atraviesan las comunidades y los retos que deben asumir para defender su cosmovisión del mundo, su estilo de vida.

Así comienza el prólogo: "los pueblos indígenas son pioneros. Contaban con un dios mucho antes de que la Iglesia católica pisara lo que hoy es Argentina. Tenían formas de gobierno antes de que se instaurara el Virreinato del Río de la Plata. Y se regían por leyes propias mucho antes de que el país tuviera su primera Constitución Nacional. Padecieron campos de concentración antes que el pueblo judío. Conocieron torturas y secuestros de bebés antes de la dictadura argentina de 1976. Y defienden el territorio y los bienes naturales desde mucho antes que se comenzara a hablar de ecología".

"Durante los últimos veinte años los sucesivos gobiernos protegieron, incentivaron y promocionan el modelo extractivo, basado en exportar naturaleza. 'Bienes comunes' dicen los intelectuales. 'Recursos no renovables' llaman los economistas. 'Nuestra vida' explican los pueblos ancestrales", define el periodista ■

HIDROAYSEN AVANZA EN LAS CONSTRUCCIONES SOBRE LOS RIOS BAKER Y PASCUA,
LO QUE GENERARA LA INUNDACION DE 6.000 HECTAREAS DE LA REGION DE AYSEN

Las represas que cocina Chile y que van a impactar en Chubut

El plan hidroeléctrico más ambicioso de la historia de Chile busca instalar cinco centrales en los caudalosos ríos Baker y Pascua para aportar 2.750 megawatts al sistema que abastece a gran parte del país. Una inversión de 3.200 millones de dólares que estará totalmente operativa en 2025 y que generará la inundación de 6.000 hectáreas en la Región de Aysén, además de “daños colaterales” aún no calculados en la cordillera chubutense, específicamente en Lago Puelo.

POR **ANDREA CASTRO**
Comodoro Rivadavia
Redacción EES

Las manifestaciones públicas convocadas en 25 ciudades de Chile tiene un elemento en común: el rechazo al megaproyecto energético HidroAysén, que implica construir cinco represas en la Patagonia con el objetivo de satisfacer las futuras necesidades eléctricas del país. Desde la aprobación del proyecto por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental, las protestas callejeras se han sucedido y las últimas encuestas hablan de un 74% de oposición a nivel nacional frente a esta iniciativa, mientras que entre los habitantes de la región de Aysén el rechazo es de un 60%. El último actor en entrar al debate fue la Iglesia católica, con la Conferencia Episcopal planteando que «una decisión basada sólo en intereses económicos es éticamente inaceptable», recalcando que la institución religiosa «no concibe al desarrollo sin considerar la sostenibi-



MOVILIZADOS.

Las manifestaciones públicas convocadas en 25 ciudades de Chile tiene un elemento en común: el rechazo al megaproyecto energético HidroAysén.

“cuando protegemos, preservamos y conservamos áreas de nuestro ambiente, se afectan intereses, en algunos casos económicos, políticos o jurisdiccionales lo cual podrá plantear discusiones y distintos puntos de vista, pero nosotros consideramos la necesidad prioritaria de preservar”.

El proyecto de construcción de represas hidroeléctricas por parte de Chile representa ahora un desafío en el mantenimiento del equilibrio diplomático entre países vecinos frente a la sustentabilidad y defensa ambiental. En tal sentido, el gobernador Mario Das Neves ha referido reiteradamente que “tenemos un compromiso irrenunciable con la preservación del medio ambiente”.

“El Estado desempeña un papel muy importante en la preservación del medio ambiente, porque tiene como responsabilidad la promoción de un crecimiento y desarrollo económico que genere riquezas y fuentes de trabajo en forma armónica, respetando, preservando y defendiendo a los recursos naturales y al ambiente en su conjunto”, dijo.

PLAN OSADO Y RIESGOSO

La propia HidroAysén se describe: “con una inversión cercana a los US\$ 3.200 millones, el Proyecto HidroAysén aportará 2.750 MW al Sistema Interconectado Central, que se extiende entre la Tercera y Décima región del país, donde vive más del 90% de los chilenos”.

Por su parte, Patagonia Sin Represas cuestiona: “es osado y riesgoso pretender tomar una decisión que implicaría la transformación irreversible de un vasto territorio de alta prístinidad en un lugar lleno de represas y cruzado por enormes tendidos eléctricos. Si estos proyectos fuesen autorizados, en la práctica se estaría permitiendo que el monopolio eléctrico que persigue su implementación por intereses comerciales privados, se apropie gratuitamente de este valioso capital natural de todos los chilenos”.

Hasta el economista Manfred Max-Neef se opuso: “sostengo con toda mi fuerza que ningún interés económico, bajo ninguna circunstancia, puede estar sobre la reverencia por vida; de todas las manifestaciones de la vida. ¿Cuántos de estos principios respeta el monstruo de HidroAysén?”, preguntó en una carta abierta al presidente Sebastián Piñera ■

lidad medioambiental». A INUNDARLAS empresa española Endesa (controlada por la italiana Enel) y la chilena Colbún están detrás de HidroAysén, el mayor proyecto hidroeléctrico en la historia de ese país, que busca instalar cinco centrales en los caudalosos ríos Baker y Pascua para aportar 2.750 megawatts al sistema que abastece a gran parte del país. Se trata de una inversión de 3.200 millones de dólares que estará totalmente operativa en 2025, aunque para ello debe pasar una segunda etapa clave que es la aprobación de la línea de transmisión y su estudio de impacto ambiental será presentado en diciembre próximo. La construcción de las represas generará la inundación de unas 6.000 hectáreas, lo que a juicio de HidroAysén representa sólo el 0,05% de la superficie de esta región cuya capital es Coyhaique. Sin embargo, la oposición al proyecto plantea que un 70% de la superficie inundada será el valle del río Baker, donde hay asentamientos humanos, biodiversidad y actividad cultural.

“VERDADES” EMPRESARIAS

Daniel Fernández, vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, argumentó que es necesario que se concrete para aportar al futuro desarrollo del país, posibilitando una rebaja de tarifas. «Chile está creciendo al 4 ó 5% y todas las proyecciones oficiales y de especialistas indican que la energía va a ir de la mano y vamos a tener una duplicación del tamaño de la matriz energética en 10 ó 15 años, dependiendo de cuánto crezca la economía. Y la pregunta es cómo Chile va a enfrentar ese crecimen-

to energético», planteó. El directivo remarcó que países que sí tienen otros recursos energéticos como Brasil, Argentina o Venezuela cuentan con un importante porcentaje de hidroelectricidad en su matriz. A su juicio, en Chile debe pasar lo mismo. «Cómo Chile, un país que tiene importantes reservas hidrológicas y tiene cero petróleo, gas y carbón, cuenta con un 70% de la matriz térmica. Si uno mira eso se da cuenta por qué tenemos el doble de tarifas eléctricas que el resto de los países», sostuvo.

REPAROS ECOLOGISTAS

Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia chilena, explicó que el rechazo se centra en que HidroAysén va a generar daños irreparables en esta zona austral de Chile y Argentina. «El país en su conjunto ha tomado conciencia de que la Patagonia chilena es nuestro mayor patrimonio natural y que los países también deben negarse a destruir su patrimonio natural», señaló. Los representantes del movimiento ecologista acusan que las inundaciones van a afectar «los únicos valles de la parte sur de Aysén donde hay vida humana», y abogan por energías sustentables para dar respuesta a los futuros requerimientos del país. «Nosotros tenemos energía eólica, energía solar, energía de biomasa y de geotermia, y podemos perfectamente en distintas partes del territorio con una nueva visión de matriz biodiversificada y multipunto, satisfacer la demanda eléctrica del país en forma sustentable y sin destruir la Patagonia chilena»,

aseguró.

TIBIEZA DE DAS NEVES

Como se apuntó, el megaproyecto de HidroAysén ya puso su pie en la Patagonia. La evaluación de impacto ambiental se aprobó después de tres años de idas y vueltas porque no satisfacía a la Comisión de Evaluación Ambiental de Coyhaique. Un encuentro entre Argentina y Chile a mediados de mayo reunió a varios gobernadores, entre ellos Mario Das Neves, de Chubut - provincia involucrada en el proyecto, que se emplaza en aguas binacionales.

El chubutense prefirió hablar de medio ambiente y esquivó fijar postura frente a las represas. «En este tema es fundamental la toma de conciencia, algo que afortunadamente en nuestra provincia existe, y que tenemos que trabajar duro para que también exista en todo el territorio nacional», recupera de Das Neves un cable.

HidroAysén planea generar 2.750 megavatios de energía con represas de dos ríos principales, el Baker y el Pascua. Antes, y esa es la discusión que viene ahora, deberá tener el visto bueno para colocar una línea de transmisión de 2.300 kilómetros, que llevará energía a Santiago.

La campaña Patagonia Sin Represas señaló que el estudio aprobado carece de información esencial, tergiversa hechos y utiliza datos incompletos. La región tendrá un fuerte y negativo impacto ambiental, advierten.

HABLEMOS, HABLEMOS

En declaraciones a la prensa del vecino país, Das Neves sostuvo: